

**No. 39824**

---

**Paraguay  
and  
Cuba**

**Agreement between the Government of the Republic of Paraguay and the  
Government of the Republic of Cuba on the promotion and reciprocal protection  
of investments. Havana, 21 November 2000**

**Entry into force: 6 December 2002, in accordance with article 12**

**Authentic text: Spanish**

**Registration with the Secretariat of the United Nations: Paraguay, 16 January 2004**

---

**Paraguay  
et  
Cuba**

**Accord entre le Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de  
la République de Cuba relatif à la promotion et à la protection réciproque des  
investissements. La Havane, 21 novembre 2000**

**Entrée en vigueur : 6 décembre 2002, conformément à l'article 12**

**Texte authentique : espagnol**

**Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Paraguay, 16 janvier 2004**

[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]

**ACUERDO  
ENTRE  
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
Y  
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA  
SOBRE  
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES**

El Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República de Cuba, en adelante denominados "PARTES CONTRATANTES".

DESEANDO intensificar la cooperación económica en beneficio mutuo de ambos Estados;

CON INTENCIÓN de crear y mantener condiciones favorables a las inversiones de inversionistas de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante;

RECONOCIENDO la necesidad de promover y proteger las inversiones extranjeras con el propósito de favorecer la prosperidad económica de ambos Estados;

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

**ARTÍCULO 1  
DEFINICIONES**

A los efectos del presente Acuerdo:

1. El término "Inversión" comprende todo tipo de activos colocados por un inversionista de una Parte Contratante en el Territorio de la otra Parte Contratante de conformidad con la legislación vigente de esta última.

El término comprende en particular, aunque no exclusivamente:

(a) La propiedad de bienes muebles e inmuebles, así como los demás derechos reales tales como hipotecas, gravámenes, derechos de prenda y otros derechos de garantía;

(b) Acciones o derechos de participación en sociedades o cualesquiera otras formas de participación en sociedad o negocios conjuntos, así como los intereses económicos resultantes de la respectiva actividad;

(c) Los títulos de créditos y derechos a cualquier tipo de prestación de valor económico; los préstamos estarán incluidos solamente cuando estén directamente vinculados a una inversión extranjera directa específica;

(d) Derechos de propiedad industrial e intelectual, derechos sobre bienes intangibles, incluyendo en especial derechos de autor, patentes, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, procedimientos técnicos y tecnológicos, "Know-how" y valor llave;

(e) Las concesiones económicas conferidas por ley o mediante contratos, incluyendo las concesiones para la búsqueda, el cultivo, la extracción o la explotación de recursos naturales.

Cualquier modificación en la forma de realización de las inversiones no afectará su calificación como inversión, siempre que dicha modificación sea efectuada de acuerdo a la legislación vigente de la Parte Contratante en el territorio en el cual la inversión haya sido realizada.

2. El término "**Inversionista**" designa:

2.1 Para la República del Paraguay:

- a) Toda persona física que sea nacional de esta Parte Contratante, de conformidad con su legislación. Las disposiciones de este Acuerdo no se aplicarán a la inversiones realizadas por personas físicas que sean nacionales de una Parte Contratante, en el territorio de la dicha Parte Contratante, si tales personas, a la fecha de la inversión, residiesen en forma permanente o se domiciliaren en esta última Parte Contratante, a menos que se pruebe que los recursos referidos a esta inversión provienen del exterior.
- b) Toda persona jurídica constituida de conformidad con la legislación vigente de una Parte Contratante y que tenga su sede en el territorio de dicha Parte Contratante.
- c) Las personas jurídicas establecidas en el territorio donde se realiza la inversión, efectivamente controladas, directa o indirectamente por personas físicas o jurídicas definidas en 2.1 a) y b).

2.2 Para la República de Cuba:

- a) Persona Natural: toda persona física que tenga la ciudadanía cubana y resida de forma permanente en el territorio de la República de Cuba, de conformidad con su legislación vigente.
- b) Personas Jurídicas: las constituidas de conformidad con su legislación vigente que tienen su sede en el territorio de esta Parte Contratante.

3. El término "**Renta**" designa las sumas obtenidas por una inversión realizada de conformidad con este Acuerdo, tales como utilidades, ganancias, dividendos, intereses, regalías, otros ingresos corrientes y cualquier otra utilidad proveniente del excedente de explotación.

4. El término "**Territorio**" designa:

- (a) En relación con la República del Paraguay, se refiere a la extensión territorial sobre el cual el Estado ejerce su soberanía o jurisdicción conforme al Derecho Internacional y la Constitución Nacional.
- (b) En relación con la República de Cuba, además de las áreas que se encuentran dentro de los límites terrestres, también se incluirán las áreas marinas y submarinas

sobre las cuales el Estado cubano tiene soberanía o conforme al Derecho Internacional, ejerce derechos de soberanía o jurisdicción.

#### **ARTÍCULO 2 AMBITO DE APLICACIÓN**

El presente Acuerdo será aplicado a las inversiones en el territorio de una de las Partes Contratantes, realizadas de conformidad con su legislación, antes o después de la entrada en vigencia de este Acuerdo. Sin embargo, el presente Acuerdo no será aplicado a ninguna controversia, reclamo o diferendo que se hubiese originado con anterioridad a su entrada en vigor.

#### **ARTÍCULO 3 PROMOCIÓN DE INVERSIONES**

Cada Parte Contratante promoverá en su territorio, en la medida de lo posible, las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante y admitirá tales proyectos conforme a su legislación vigente.

#### **ARTÍCULO 4 PROTECCIÓN DE INVERSIONES, TRATO NACIONAL Y DE LA NACIÓN MÁS FAVORECIDA**

1. Cada Parte Contratante protegerá en su territorio las inversiones efectuadas según su legislación vigente, por los inversionistas de la Parte Contratante y no obstaculizará con medidas injustificadas o discriminatorias la gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, el desarrollo, la venta y si fuera el caso, la liquidación de dichas inversiones.
2. Cada Parte Contratante garantizará en su territorio un trato justo y equitativo para las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante. Este trato no será menos favorable que el acordado, en circunstancias similares, por cada Parte Contratante a las inversiones efectuadas en su territorio por sus propios inversionistas o al otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones efectuadas en su territorio por inversionistas de la nación más favorecida, siempre y cuando este último trato fuera más favorable.
3. El trato de la nación más favorecida no se aplicará a los privilegios que una Parte Contratante acuerde a los inversionistas de un tercer Estado en virtud de su participación, o asociación, presente o futura, a una zona de libre comercio, a una unión aduanera, a un mercado común o a un acuerdo regional similar.
4. El trato acordado por el presente Artículo no se refiere a las ventajas que una de las Partes Contratantes conceda a los inversionistas de terceros Estados como consecuencia de un Acuerdo para Evitar la Doble Imposición o de otros Acuerdos sobre asuntos tributarios.
5. Al efecto de evitar dudas se confirma que las disposiciones de los párrafos (1) y (2) de este Artículo, son aplicables solamente a las inversiones admitidas por las Partes Contratantes en consonancia con su legislación para las Inversiones. El trato al que se refieren los párrafos (1) y (2), es aplicable a los Artículos 1 al 11 del presente Acuerdo.

6. Las medidas que se adopten con carácter general por razones de orden público, seguridad o salud pública, no se considerarán como tratamiento menos favorable en el sentido del presente artículo.

#### **ARTÍCULO 5 TRANSFERENCIA**

1. Cada Parte Contratante, en cuyo territorio inversionistas de la otra Parte Contratante hayan efectuado inversiones, garantizará a estos la libre transferencia de los pagos relacionados con esas inversiones, en particular aunque no exclusivamente de:

- (a) Renta;
- (b) Amortizaciones de préstamos vinculados a una inversión;
- (c) Importes destinados a cubrir los gastos relativos a la administración de las inversiones;
- (d) La contribución adicional de capital necesario para el mantenimiento o desarrollo de las inversiones;
- (e) El producto de la venta o de la liquidación parcial o total de una inversión;
- (f) Las compensaciones e indemnizaciones previstas en los Artículos 6 y 7;
- (g) Cualquier pago preliminar que pueda haber sido efectuado en nombre del inversionistas de acuerdo al Artículo 8 del presente Acuerdo.
- (h) Reinversiones ampliatorias.

2. Las transferencias arriba mencionadas serán efectuadas sin demora, luego del cumplimiento de las correspondientes obligaciones fiscales, en la moneda en la que se realizó inicialmente la inversión, libremente convertible o en cualquier otra que acuerden las partes a la tasa de cambio oficial aplicable en el mercado a la fecha de la transferencia, de conformidad con la legislación vigente en materia de control de cambios en el territorio de la Parte Contratante, donde se realizó la inversión.

3. Sin perjuicio de las disposiciones de los párrafos 1 y 2, cada Parte Contratante podrá impedir una transferencia con el objeto de proteger los derechos de acreedores o asegurar el cumplimiento de decisiones firmes emitidas en procesos administrativos, judiciales o arbitrales, a través de una aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes y reglamentos, incluyendo en particular aunque no exclusivamente:

- (a) Quiebra o insolvencia;
- (b) Infracciones penales;
- (c) Garantía del cumplimiento de los mandamientos o fallos en actuaciones judiciales;
- (d) Incumplimiento de obligaciones laborales;
- (e) Derechos Sociales;
- (f) Incumplimiento de obligaciones tributarias.

## **ARTÍCULO 6 EXPROPIACIÓN Y COMPENSACIÓN**

1. Ninguna de las Partes Contratantes adoptará directa o indirectamente, medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de naturaleza jurídica similar, contra las inversiones de inversionistas de la otra Parte Contratante, excepto por las causas de utilidad pública o de interés social y a condición de que dichas medidas no sean discriminatorias, y que den lugar al previo pago de una justa indemnización, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
2. La indemnización deberá corresponder al valor de mercado de la inversión expropiadá inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la expropiación, la nacionalización o medida equivalente. La indemnización deberá abonarse sin demora, en la moneda libremente convertible en que se realizó la inversión o en cualquier otra que acuerden las partes.
3. El inversionista afectado tendrá derecho a que la justa indemnización sea establecida por sentencia de la autoridad judicial competente del Estado expropiante, sin perjuicio de lo que las partes puedan determinar de común acuerdo.

## **ARTÍCULO 7 COMPENSACIONES POR PERDIDAS**

Los inversionistas de una de las Partes Contratantes cuyas inversiones en el territorio de la otra Parte Contratante sufren pérdidas ocasionadas por guerras, u otros conflictos armados, un estado de emergencia nacional, rebelión, insurrección o motín en el territorio de la otra Parte Contratante, recibirán de esta última Parte Contratante, en lo referente a restitución, indemnización, compensación u otro arreglo, un trato no menos favorable que el que esta última Parte Contratante acuerda para sus propios inversionistas o para los inversionistas de otros Estados, en circunstancias similares.

## **ARTÍCULO 8 SUBROGACIÓN**

Cuando una Parte Contratante o una de sus agencias autorizadas haya acordado una garantía o seguro para cubrir los riesgos no comerciales con relación a una inversión efectuada por uno de sus inversionistas en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última Parte Contratante reconocerá la subrogación de la primera Parte Contratante o sus agencias autorizadas en los mismos derechos del Inversionista reconocidos por la ley de la Parte receptora de la inversión, siempre y cuando la primera Parte Contratante haya efectuado un pago en virtud de dicha garantía y la otra Parte Contratante exprese su conformidad.

### ARTÍCULO 9

#### SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y UN INVERSIONISTA DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE

1. Toda controversia relativa a las disposiciones del presente Acuerdo respecto de una inversión entre un inversionista de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante, será, en la medida de lo posible, solucionada mediante consultas amistosas.
2. Si estas consultas no permiten solucionar la controversia en un plazo de seis meses, a partir de la fecha de la notificación escrita, cualquiera de las partes podrá someter la disputa a la:
  - a) jurisdicción nacional de la Parte Contratante, en cuyo territorio se realizó la inversión, o bien al;
  - b) arbitraje internacional. En este último caso las partes tienen las siguientes opciones:
    - b I) el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (C.I.A.D.I.), creado por el Convenio sobre Arreglo de Diferencias entre Estados y Nacionales de otros Estados, abierto a la firma en Washington D.C., el 18 de marzo de 1965, siempre que ambas Partes sean miembros del Convenio.
    - b II) un tribunal Ad Hoc, que será constituido bajo las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).
3. Una vez aceptada expresamente por la otra parte y sometido el diferendo a uno de los procedimientos citados en los incisos a), bI) y bII), del numeral anterior, la selección será definitiva.
4. La Parte Contratante que sea parte de una controversia en ningún momento, durante los procedimientos, podrá utilizar en su defensa su inmunidad o el hecho que el Inversionista haya recibido una compensación, por contrato de seguro, indemnizando la totalidad o parte de los daños o perdidas incurridas.
5. El tribunal arbitral podrá decidir en base al presente Acuerdo y en otros Acuerdos relevantes entre las Partes Contratantes; en los términos de algún acuerdo específico que pueda ser concluido con relación a la inversión; en la ley de la Parte Contratante que sea parte en la controversia, inclusive en sus normas sobre conflicto de leyes; y en aquellos principios y normas del Derecho Internacional que fueran aplicables.
6. Las decisiones del tribunal son definitivas y obligatorias para las partes en controversia. Cada Parte Contratante las ejecutará de conformidad con su legislación.

**ARTÍCULO 10  
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES**

1. Las controversias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o a la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo se resolverán mediante negociaciones por la vía diplomática.
2. Si las Partes Contratantes no llegan a un acuerdo dentro de los seis meses contados a partir de la iniciación de la controversia, esta será sometida, a solicitud de cualquiera de ellas, a un tribunal arbitral compuesto de tres miembros. Cada Parte Contratante designará un árbitro, y ambos árbitros así designados nombrarán al Presidente del tribunal, que deberá ser nacional de un tercer Estado.
3. Si una de las Partes Contratantes no hubiera designado su árbitro y no diera respuesta a la invitación de la otra Parte Contratante de efectuar esta designación dentro de dos meses, el árbitro será designado, a solicitud de esta última Parte Contratante, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
4. Si los dos árbitros no logran llegar a un acuerdo sobre la elección del presidente en el plazo de dos meses siguientes a su designación, este último será designado, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
5. Si, en los casos previstos en los párrafos (3) y (4) del presente Artículo, el Presidente de la Corte Internacional de Justicia estuviera impedido de realizar dicha función, o si fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, las designaciones serán realizadas por el Vicepresidente y si este último estuviera impedido, o si fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, los nombramientos serán realizados por el Juez de la Corte de mayor antigüedad que no sea nacional de cualquiera de las Partes Contratantes.
6. El Tribunal Arbitral tomará su decisión por mayoría de votos. Cada Parte Contratante sufragará los gastos de su árbitro y de su representación en el procedimiento arbitral. Los gastos del Presidente, así como los demás gastos serán sufragados, en principio, en partes iguales, por las Partes Contratantes.
7. El propio tribunal determinará su procedimiento.
8. Las decisiones del tribunal son definitivas y obligatorias para las Partes Contratantes.

**ARTÍCULO 11  
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**

Cada Parte Contratante respetará en todo momento todas las obligaciones contraídas con respecto de las inversiones de los inversionistas de la otra Parte Contratante.

Si las disposiciones de la legislación de cualquier Parte Contratante o las obligaciones del Derecho Internacional existentes o que se establezcan en el futuro entre las Partes Contratantes, en adición al presente Acuerdo, contienen una reglamentación general o especial que autorizara las inversiones de los

inversionistas de la otra Parte Contratante a un trato más favorable que el previsto en el presente Acuerdo, dicha reglamentación prevalecerá sobre el presente Acuerdo.

Toda expresión que no esté definida en el presente Acuerdo tendrá el sentido utilizado en la legislación vigente en cada Parte Contratante.

#### **ARTÍCULO 12 VIGENCIA, DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL ACUERDO**

El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta días siguientes de la fecha de la recepción de la última notificación en la cual las Partes Contratantes se hayan notificado reciprocamente por escrito y por la vía diplomática, que se ha cumplido con los procedimientos constitucionales necesarios para su aprobación en sus respectivos países y permanecerá en vigencia por un periodo de 10 años.

En caso de que cualquiera de las Partes Contratantes decida dar por terminado este Acuerdo, deberá notificar por escrito y por la vía diplomática, de su decisión, a la otra Parte Contratante, por lo menos con doce (12) meses antes de la fecha de expiración de su actual vigencia. De lo contrario, el presente Acuerdo se prorrogará por tiempo indefinido, y en esta etapa las Partes Contratantes podrán notificarse de la decisión de dar por terminado este Acuerdo, en cualquier momento, por escrito y por la vía diplomática. Se hará efectiva la terminación del Acuerdo doce (12) meses después de la recepción de la notificación escrita.

Con relación a aquellas inversiones hechas antes de la fecha de terminación de este Acuerdo, los Artículos 1 al 11, precedentes del mismo, continuarán en vigor por un periodo de 10 años a partir de esa fecha.

**EN FE DE LO CUAL**, los abajo firmantes debidamente autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos, suscriben el presente Acuerdo.

Hecho en la Ciudad de La Habana, a los veintiún días del mes de noviembre del año 2000 en el idioma español en dos ejemplares, siendo ambos textos igualmente auténticos.

**POR EL GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DEL PARAGUAY**

**POR EL GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE CUBA**

JUAN ESTEBAN AGUIRRE MARTÍNEZ  
MINISTRO  
DE RELACIONES EXTERIORES

MARTA LOMAS MORALES  
MINISTRA  
PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA  
Y LA COLABORACIÓN ECONÓMICA

[TRANSLATION — TRADUCTION]

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PARAGUAY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA ON THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Republic of Paraguay and the Government of the Republic of Cuba, hereinafter referred to as the "Contracting Parties",

Desiring to intensify economic cooperation to the mutual benefit of both States,

Intending to create and maintain favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

Recognizing the need to promote and protect foreign investments with the aim of fostering the economic prosperity of both States,

Have agreed as follows:

*Article I. Definitions*

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" means any kind of asset invested by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party pursuant to the legislation in force in the latter.

In particular, although not exclusively, the term shall include:

(a) Movable and immovable property and other property rights, such as mortgages, liens, pledges and other security rights;

(b) Stock or shares in companies or any other forms of equity in companies or joint enterprises as well as the economic interests arising from the business activity;

(c) Claims to sums of money and rights to any performance having an economic value; loans shall be included only when they are directly linked to specific foreign direct investments;

(d) Industrial and intellectual property rights, rights to intangible assets, including, in particular, copyrights, patents, industrial designs, trademarks, commercial trade names, technical and technological processes, know-how and goodwill;

(e) Economic concessions conferred by law or by contract, including concessions to search for, cultivate, extract or exploit natural resources.

Any change in the form in which investments are made shall not affect their status as investments, provided that such changes are made in accordance with the applicable legislation of the Contracting Party in whose territory the investment has been made.

2. The term "investor" means:

2.1. In respect of the Republic of Paraguay:

(a) Any natural person who is a national of the Contracting Party in question pursuant to its legislation. The provisions of this Agreement shall not apply to investments made by natural persons who are nationals of a Contracting Party in the territory of the said Contracting Party if, at the time of the investment, those persons are permanently residing or domiciled in the latter, unless it can be shown that the resources involved in the investment originated outside the Contracting Party;

(b) Any legal person constituted pursuant to the applicable legislation of a Contracting Party and having its head office in the territory of the said Contracting Party;

(c) Legal persons constituted in the territory where the investment is made which are under the effective control, directly or indirectly, of natural or legal persons as defined in paragraph 2.1 (a) and (b).

2.2. In respect of the Republic of Cuba:

(a) Natural persons: any natural person with Cuban citizenship and permanently residing in the territory of the Republic of Cuba, pursuant to its applicable legislation;

(b) Legal persons: legal persons constituted pursuant to its applicable legislation having their head office in the territory of the Contracting Party in question.

3. The term "returns" means the amounts yielded by an investment made in accordance with this Agreement, such as profits, earnings, dividends, interest, royalties, other regular income and any other profits from operating surplus.

4. The term "territory" means:

(a) In respect of the Republic of Paraguay, the land area over which the State exercises sovereignty or jurisdiction in accordance with international law and the national Constitution;

(b) In respect of the Republic of Cuba, in addition to the areas falling within land boundaries, marine and submarine areas over which the Cuban State has sovereignty or exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with international law.

*Article 2. Scope of application*

The present Agreement shall apply to investments in the territory of one of the Contracting Parties made in accordance with its legislation before or after the entry into force of this Agreement. It shall not, however, be applicable to any disputes, claims or disagreements which arose prior to its entry into force.

*Article 3. Promotion of investments*

Each Contracting Party shall, within its territory, promote, as far as possible, investments by investors of the other Contracting Party and shall admit such projects in accordance with its applicable legislation.

*Article 4. Protection of investments, national and most-favoured-nation treatment*

1. Each Contracting Party shall, within its territory, protect investments made in accordance with its applicable legislation by investors of the other Contracting Party and shall not hinder by unjustified or discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment, development, sale and, where appropriate, liquidation of such investments.
2. Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment within its territory of the investments made by investors of the other Contracting Party. This treatment shall not be less favourable than that accorded in similar circumstances by each Contracting Party to investments made within its territory by its own investors or than that granted by each Contracting Party to the investments made within its territory by investors of the most favoured nation, provided that the latter treatment is more favourable.
3. Most-favoured-nation treatment shall not include privileges granted by a Contracting Party to investors of a third State by virtue of its present or future membership in or association with a free trade area, customs union, common market or similar regional agreement.
4. The treatment accorded under this article shall not refer to privileges granted by either Contracting Party to investors of third States by virtue of a double taxation agreement or other agreements regarding matters of taxation.
5. By way of clarification, the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article shall apply only to investments admitted by the Contracting Parties in accordance with their legislation on investments. The treatment referred to in paragraphs 1 and 2 is applicable to articles 1 to 11 of this Agreement.
6. Measures of a general nature adopted for reasons of public order, safety or public health shall not be regarded as less favourable treatment within the meaning of this article.

*Article 5. Transfer*

1. Each Contracting Party in whose territory investments have been made by investors of the other Contracting Party shall guarantee those investors the free transfer of the payments relating to the investments, including in particular but not limited to:
  - (a) Returns;
  - (b) Repayments of loans in connection with an investment;
  - (c) Amounts allocated to cover expenses relating to the management of the investments;
  - (d) Additional contributions of capital necessary for the maintenance or development of the investments;
  - (e) Proceeds from the sale or the partial or total liquidation of an investment;
  - (f) Compensation and indemnification as provided for under articles 6 and 7;
  - (g) Any preliminary payment that may have been made on behalf of investors in accordance with article 8 of this Agreement;
  - (h) Supplementary reinvestments.

2. The aforementioned transfers shall be put through without delay, once the related tax liability has been met, in the freely convertible currency used for the initial investment or in any other currency agreed upon by the parties at the official exchange rate applicable to the market on the date of transfer, in accordance with the legislation on exchange controls in force in the territory of the Contracting Party in which the investment was made.

3. Without prejudice to the provisions of paragraphs 1 and 2, each Contracting Party may prevent a transfer in order to protect the rights of creditors or to ensure compliance with official rulings handed down in administrative, legal or arbitration proceedings through the application, in an equitable and non-discriminatory manner and in good faith, of its laws and regulations, relating in particular but not exclusively to:

- (a) Bankruptcy or insolvency;
- (b) Criminal offences;
- (c) Guarantee of compliance with judicial orders or decisions;
- (d) Failure to comply with labour obligations;
- (e) Social rights;
- (f) Failure to comply with tax obligations.

#### *Article 6. Expropriation and compensation*

1. Neither Contracting Party shall take, either directly or indirectly, expropriation or nationalization measures or any other similar legal measures against investments of investors of the other Contracting Party, unless they are taken for the public benefit or in the social interest and provided that they are non-discriminatory and make provision for the payment of fair compensation, in accordance with the legislation in force.

2. Compensation must correspond to the market value of the expropriated investment immediately prior to the date on which the expropriation, nationalization or similar measure became public knowledge. Compensation must be paid immediately in the freely convertible currency in which the investment was made or in any other currency agreed upon by the parties.

3. The investor concerned shall be entitled to have fair compensation determined by a decision of the competent judicial authority of the expropriating State, without prejudice to any decisions taken by the parties by mutual agreement.

#### *Article 7. Compensation for losses*

Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting Party suffer losses owing to war or other armed conflict, a state of national emergency, rebellion, insurrection or riot in the territory of the other Contracting Party shall be accorded treatment by the latter Contracting Party, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, that is no less favourable than that which the latter Contracting Party accords to its own investors or investors of other States in similar circumstances.

*Article 8. Subrogation*

When a Contracting Party or one of its authorized agencies has granted a guarantee or insurance against non-commercial risks in respect of an investment made by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize the right of the first Contracting Party or its authorized agencies to be subrogated to the rights of the investor as recognized under the legislation of the Contracting Party receiving the investment, provided that the first Contracting Party has made a payment under that guarantee and that the other Contracting Party expresses its consent.

*Article 9. Settlement of disputes between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party*

1. Any disputes relating to the provisions of this Agreement with respect to an investment between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party shall, as far as possible, be settled through amicable consultations.
2. If these consultations do not result in a solution within six months from the date of the written notification, either of the parties may submit the dispute to:
  - (a) The national jurisdiction of the Contracting Party in whose territory the investment has been made; or
  - (b) International arbitration. In the latter event, the parties shall have the choice between:
    - b I) The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, opened for signature at Washington, D.C., on 18 March 1965, provided that both Contracting Parties are parties to the Convention;
    - b II) An ad hoc tribunal constituted in accordance with the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).
3. Once the other party has expressly accepted the choice and the dispute has been submitted to one of the procedures described in paragraph 2 (a), (b) (i) and (b) (ii) above, the choice shall be definitive.
4. A Contracting Party that is a party to a dispute may not, at any time during the procedures, assert as a defence its immunity or the fact that the investor has received compensation under an insurance contract covering the whole or part of the incurred damage or loss.
5. The arbitral tribunal shall decide on the basis of the present Agreement and other relevant agreements between the Contracting Parties; the terms of any particular agreement that may have been concluded with respect to the investment; the law of the Contracting Party that is a party to the dispute, including its rules on the conflict of laws; and such principles and rules of international law as may be applicable.
6. The decisions of the tribunal shall be final and binding on the parties to the dispute. Each Contracting Party shall implement them in accordance with its legislation.

*Article 10. Settlement of disputes between the Contracting Parties*

1. Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled through the diplomatic channel by negotiation.
2. If the Contracting Parties cannot reach an agreement within six months after the beginning of the dispute, the matter shall, upon the request of either Contracting Party, be submitted to an arbitral tribunal composed of three members. Each Contracting Party shall appoint one arbitrator, and these two arbitrators shall nominate a chairman, who shall be a national of a third State.
3. If one of the Contracting Parties has not appointed its arbitrator and has not responded to the invitation of the other Contracting Party to make that appointment within two months, the arbitrator shall be appointed, upon the request of that Contracting Party, by the President of the International Court of Justice.
4. If the two arbitrators cannot reach an agreement about the choice of the chairman within two months after their appointment, the chairman shall be appointed, upon the request of either Contracting Party, by the President of the International Court of Justice.
5. If, in the cases specified in paragraphs 3 and 4 of this article, the President of the International Court of Justice is prevented from carrying out the said function or if he or she is a national of either Contracting Party, the appointments shall be made by the Vice-President, and if the latter is prevented from doing so or if he or she is a national of either Contracting Party, the appointments shall be made by the most senior judge of the Court who is not a national of either Contracting Party.
6. The arbitral tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the arbitral proceedings. The cost of the chairman and the remaining costs shall, in principle, be borne in equal parts by the Contracting Parties.
7. The tribunal shall determine its own procedures.
8. The decisions of the tribunal shall be final and binding on the Contracting Parties.

*Article 11. Additional provisions*

Each Contracting Party shall observe at all times all the commitments it has entered into with respect to the investments of investors of the other Contracting Party.

If, either now or in the future, the legislation of either Contracting Party or the mutual obligations of the two Contracting Parties arising from international law apart from this Agreement contain a general or specific rule under which investments of investors of the other Contracting Party are granted more favourable treatment than the treatment provided for in this Agreement, such a rule shall prevail over this Agreement.

Any terms not defined in this Agreement shall have the meanings used in the applicable legislation of each Contracting Party.

*Article 12. Entry into force, duration and termination of the Agreement*

This Agreement shall enter into force thirty days from the date of receipt of the last notification by which the Contracting Parties have notified each other, in writing and through the diplomatic channel, that they have fulfilled the constitutional requirements for the approval of the Agreement in their respective countries and shall remain in force for a period of 10 years.

In the event that either Contracting Party decides to terminate this Agreement, it must notify the other Contracting Party in writing through the diplomatic channel of its decision at least twelve (12) months prior to its current expiry date. Otherwise, this Agreement shall be renewed for an indefinite period and, at that stage, the Contracting Parties may notify each other at any time, in writing and through the diplomatic channel, of their decision to terminate it. The Agreement shall be terminated twelve (12) months after the receipt of such written notification.

With respect to investments made before the date of termination of this Agreement, articles 1 to 11 thereof shall remain in force for a period of 10 years from that date.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized for this purpose by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Havana on 21 November 2000, in duplicate in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Paraguay:

JUÁN ESTEBAN AGUIRRE MARTÍNEZ  
Minister for Foreign Affairs

For the Government of the Republic of Cuba:

MARTA LOMAS MORALES  
Minister for Foreign Investment and Economic Cooperation

[TRANSLATION — TRADUCTION]

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION RÉCIPROQUE DES INVESTISSEMENTS

Le Gouvernement de la République du Paraguay et le Gouvernement de la République de Cuba, ci-après dénommés les "Parties contractantes",

Désireux d'intensifier la coopération économique pour le bénéfice mutuel de leurs deux États,

Ayant l'intention de réunir et d'entretenir des conditions favorables pour les investissements réalisés par des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante,

Reconnaissant la nécessité de favoriser et de protéger les investissements étrangers en vue de faciliter la prospérité économique des deux États,

Sont convenus de ce qui suit :

*Article premier. Définitions*

Aux fins du présent Accord :

1. Le terme "investissements" désigne tous types d'actifs apportés par un investisseur d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément à la législation en vigueur dans cette dernière.

Le terme englobe en particulier mais pas exclusivement :

a) les biens meubles et immeubles et autres droits fonciers tels que hypothèques, liens, nantissements, droits de gage et droits similaires;

b) les actions ou parts sociales dans les sociétés ou toute autre forme d'actions dans les sociétés ou les co-entreprises, ainsi que les intérêts économiques résultant des activités commerciales;

c) les créances financières et tous droits à prestations ayant une valeur économique liée à un investissement; les prêts ne sont inclus que lorsqu'ils sont directement liés à des investissements étrangers spécifiques et directs;

d) les droits de propriété industrielle et intellectuelle, notamment droits d'auteurs, marques de fabrique ou de commerce, brevets, droits de propriété industrielle, procédés techniques, connaissances techniques, secrets commerciaux et appellations commerciales, savoir-faire et clientèle;

e) les concessions commerciales ayant une valeur économique accordée par la loi ou par contrat, y compris les concessions pour la culture ou l'exploitation des ressources naturelles.

Aucune modification de la forme, dans laquelle les actifs sont investis ou réinvestis, n'affecte leur caractère d'investissements, sous réserve que cette modification soit conforme aux lois de la Partie contractante qui accueille l'investissement.

2. Le terme "investissement" désigne :

2.1 En ce qui concerne la République du Paraguay:

a) toute personne physique qui est un ressortissant de la Partie contractante intéressée, conformément à sa législation. Les dispositions du présent Accord ne s'appliquent pas aux investissements faits par des personnes physiques qui sont des nationaux d'une Partie contractante sur le territoire de ladite Partie contractante si, au moment de l'investissement, ces personnes résidaient de façon permanente ou étaient domiciliées de façon permanente sur ce dernier territoire, sauf s'il peut être prouvé que les ressources faisant partie de l'investissement sont extérieures à la Partie contractante;

b) une personne morale constituée conformément à la législation applicable d'une Partie contractante et qui a son siège sur le territoire de ladite Partie contractante;

c) des personnes morales constituées sur le territoire où l'investissement est réalisé et qui sont sous le contrôle effectif, directement ou indirectement, de personnes physiques ou morales telles que définies dans les paragraphes 2.1 a) et b).

2.2. En ce qui concerne la République de Cuba :

a) les personnes physiques: toute personne physique qui a la citoyenneté cubaine et qui réside d'une façon permanente sur le territoire de la République de Cuba, conformément à sa législation applicable;

b) les personnes morales: les personnes morales constituées conformément à sa législation applicable, qui ont leur siège sur le territoire de la Partie contractante en question.

3. Le terme "revenus" désigne les montants recueillis par un investissement effectué conformément aux dispositions du présent Accord, tels que bénéfices, recettes, dividendes, intérêts, redevances, autre revenu régulier et tout autre bénéfice provenant des surplus de l'exploitation.

4. Le terme "territoire" désigne :

a) en ce qui concerne la République de Paraguay, la superficie terrestre sur laquelle l'État exerce sa souveraineté ou sa juridiction, conformément au droit international et à sa constitution nationale;

b) pour ce qui est de la République de Cuba, outre les zones situées à l'intérieur des frontières terrestres, les zones maritimes et sous-marines, sur lesquelles l'État cubain exerce sa souveraineté ou ses droits souverains ou sa juridiction, conformément au droit international.

*Article 2. Champ d'application*

Le présent Accord s'applique aux investissements sur le territoire d'une des Parties contractantes, effectués conformément à sa législation avant ou après l'entrée en vigueur dudit Accord. Toutefois, il ne s'applique pas aux différends, revendications ou désaccords survenus avant son entrée en vigueur.

*Article 3. Promotion des investissements*

Chaque Partie contractante favorise dans toute la mesure du possible les investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante sur son territoire et admet ces investissements conformément à sa législation applicable.

*Article 4. Protection des investissements, traitement national et traitement de la nation la plus favorisée*

1. Chaque Partie contractante protège, sur son territoire, les investissements effectués conformément à sa législation applicable par des investisseurs de l'autre Partie contractante et n'entrave d'aucune façon par des mesures injustifiées ou discriminatoires la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, le développement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de ces investissements.

2. Chaque Partie contractante veille à assurer, sur son territoire, un traitement honnête et équitable aux investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante. Le traitement en question ne sera pas moins favorable que celui qui est accordé dans des circonstances similaires, par chaque Partie contractante aux investissements réalisés sur son territoire par ses propres investisseurs ou accordé par chaque Partie contractante à des investissements faits sur son territoire par des investisseurs de la nation la plus favorisée, à condition que le dernier traitement soit plus favorable.

3. Le traitement de la nation la plus favorisée n'inclut pas les priviléges accordés par une Partie contractante à des investisseurs d'un État tiers en vertu de son adhésion actuelle ou envisagée, ou son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou un accord régional similaire.

4. Le traitement accordé au titre du présent article ne mentionne pas les priviléges accordés par l'une ou l'autre Partie contractante à des investisseurs d'États tiers en vertu d'un accord tendant à éviter la double imposition ou tout autre accord concernant les questions de fiscalité.

5. Pour clarifier les choses, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent qu'aux investissements admis par les Parties contractantes conformément à leur législation sur les investissements. Le traitement mentionné aux paragraphes 1 et 2 est applicable aux articles 1 à 11 du présent Accord.

6. Les mesures de caractère général adoptées pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique ne sont pas considérées comme un traitement moins favorable au sens du présent article.

*Article 5. Transferts*

1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été faits par des investisseurs de l'autre Partie contractante garantit aux intéressés le libre transfert des paiements liés aux investissements en ce qui concerne notamment mais non exclusivement :

- a) les revenus;

- b) le remboursement des prêts relatifs aux investissements;
- c) les montants prévus pour couvrir les dépenses liées à la gestion des investissements;
- d) les contributions supplémentaires de capital nécessaire pour l'entretien ou l'expansion des investissements;
- e) le produit des ventes ou de la liquidation totale ou partielle d'un investissement;
- f) une compensation ou une indemnisation, comme prévu aux articles 6 et 7;
- g) tout paiement préliminaire qui peut avoir été fait au nom des investisseurs, conformément à l'article 8 du présent Accord;
- h) les réinvestissements supplémentaires.

2. Les transferts mentionnés ci-dessus sont réalisés sans délai, une fois que les obligations fiscales correspondantes ont été satisfaites, dans une devise librement convertible, utilisée pour l'investissement initial ou dans toute autre devise convenue entre les Parties au taux de change officiel applicable sur le marché à la date du transfert, conformément à la législation sur le contrôle des changes en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où l'investissement a été fait.

3. Sans préjuger des dispositions des paragraphes 1 et 2, chaque Partie contractante peut empêcher un transfert en vue de protéger les droits des créanciers ou de vérifier le respect de la réglementation officielle suivie dans une procédure administrative, légale ou d'arbitrage grâce à l'application, d'une manière équitable et non discriminatoire et en toute bonne foi, de sa législation et de sa réglementation, liées notamment mais non exclusivement aux cas suivants :

- a) banqueroutes ou insolvabilité;
- b) infractions pénales;
- c) garantie d'exécution des ordonnances ou décisions judiciaires;
- d) manquement aux obligations en matière de législation du travail;
- e) droits sociaux;
- f) manquement aux obligations fiscales.

#### *Article 6. Expropriation et indemnisation*

1. Aucune des Parties contractantes ne prend directement ou indirectement des mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toute autre mesure légale similaire contre les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante, sauf si elles intéressent le bien public ou sont dans l'intérêt de la société et à condition qu'elles soient non discriminatoires et que des dispositions aient été prises pour le paiement d'une indemnisation honnête conformément à la législation en vigueur.

2. L'indemnisation doit correspondre à la valeur marchande des investissements expropriés immédiatement avant la date à laquelle l'expropriation, la nationalisation ou la mesure similaire est tombée dans le domaine public. Elle doit être payée immédiatement en devises librement convertibles, dans laquelle l'investissement a été fait, ou dans toute autre devise convenue entre les Parties.

3. L'investisseur intéressé est habilité à obtenir une compensation honnête déterminée par une décision de l'autorité judiciaire compétente de l'État qui procède à l'expropriation, sans préjuger de toute autre décision prise d'un commun accord par les Parties.

*Article 7. Indemnisation pour pertes*

Les investisseurs d'une Partie contractante, dont les investissements sur le territoire de l'autre Partie contractante subissent des dommages en raison d'une guerre ou autre conflit armé, d'un état d'urgence national, d'une révolte, d'une insurrection ou de troubles sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficient d'un traitement de la part de la dernière Partie contractante, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou autre règlement, qui n'est pas moins favorable que celui que la Partie contractante intéressée accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'autres États dans des conditions similaires.

*Article 8. Subrogation*

Lorsqu'une Partie contractante ou un de ses organismes habilités a accordé une garantie ou une assurance contre les risques non commerciaux au sujet d'un investissement réalisé par un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière reconnaît le droit de la première Partie contractante ou de ses organismes habilités à faire valoir par subrogation les droits et préentions dudit investisseur, comme accepté par la législation de la Partie contractante qui a bénéficié de l'investissement, à condition que la première Partie contractante ait fait un versement au titre de garantie et que l'autre Partie contractante ait exprimé son accord.

*Article 9. Règlement des différends entre une Partie contractante et un investisseur de l'autre Partie contractante*

1. Un différend lié aux dispositions du présent Accord, en ce qui concerne un investissement, entre un investisseur d'une Partie contractante et l'autre Partie contractante, est dans la mesure du possible résolu à l'amiable.

2. Si ces consultations ne débouchent pas sur une solution dans les six mois à partir de la date de la notification écrite, chacune des Parties peut soumettre le différend aux instances suivantes :

a) la juridiction nationale de la Partie contractante, sur le territoire de laquelle l'investissement a été fait; ou

b) un arbitrage international; dans ce dernier cas, les parties ont le choix entre :

b I) le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), établi aux termes de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, ouverte à la signature à Washington, D.C. le 18 mars 1965, à condition que les deux Parties contractantes aient adhéré à la Convention;

b II) un tribunal spécial constitué conformément aux règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

3. Une fois que l'autre partie a expressément accepté le choix et que le différend a été soumis à une des instances mentionnées aux alinéas a, b,i et b,ii du paragraphe 2 ci-dessus, le choix est définitivement entériné.

4. Une Partie contractante, qui est partie au différend, ne peut à aucun moment pendant la procédure avancer comme moyen de défense son immunité ou le fait que l'investisseur a reçu une compensation au titre d'un contrat d'assurance couvrant la totalité ou une partie des dommages ou des pertes subis.

5. Le tribunal d'arbitrage détermine, sur la base du présent Accord et d'autres accords pertinents entre les Parties contractantes, les conditions d'un arrangement particulier qui peut avoir été conclu en ce qui concerne l'investissement; la législation de la Partie contractante qui est partie au différend, y compris sa législation en matière de règlement de conflits de lois; et les principes et règlements du droit international susceptibles d'être appliqués.

6. La décision du tribunal est définitive et contraignante pour les parties au différend. Chaque Partie contractante l'exécute conformément à sa législation.

#### *Article 10. Règlement des différends entre les Parties contractantes*

1. Les différends entre les Parties contractantes liés à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord sont réglés par des négociations au niveau diplomatique.

2. Si les Parties contractantes ne peuvent atteindre un accord dans les six mois qui suivent le début du différend, la question est, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, soumise à un tribunal d'arbitrage composé de trois membres. Chaque Partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignés nomment un président qui est un ressortissant d'un État tiers.

3. Si une des Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre ou n'a pas répondu à l'invitation de l'autre Partie contractante de procéder à cette nomination dans les deux mois, l'arbitre est désigné, à la demande de ladite Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

4. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois qui suivent leur nomination, le Président est désigné, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

5. Si, dans les cas spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché de procéder à ladite nomination ou s'il est un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, la désignation est faite par le Vice-président, et si ce dernier se trouve de même empêché ou s'il est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, la nomination est faite par le doyen des juges de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties contractantes.

6. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Chaque Partie contractante assume les coûts de son propre arbitre et ceux de la représentation de celui-ci dans

les débats. Les frais afférents au Président et les autres coûts sont en principe partagés également entre les Parties contractantes.

7. Le tribunal établit son règlement intérieur.

8. La décision du tribunal est définitive et contraignante pour les Parties contractantes.

*Article 11. Dispositions supplémentaires*

Chaque Partie contractante respecte à tout moment les engagements qu'elle a pris en ce qui concerne les investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante.

Si, à un moment quelconque, maintenant ou plus tard, la législation d'une Partie contractante ou les obligations mutuelles des deux Parties contractantes résultant du droit international indépendamment du présent Accord contiennent un règlement général ou spécifique, au titre duquel les investissements réalisés par les investisseurs de l'autre Partie contractante bénéficient d'un traitement plus favorable que celui qui est prévu dans le présent Accord, ce dernier règlement prévaut sur celui de l'Accord.

Tous les termes non définis dans le présent Accord ont la signification qui leur est donnée dans la législation applicable de chaque Partie contractante.

*Article 12. Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'Accord*

Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties contractantes se sont informées réciproquement par écrit et par la voie diplomatique qu'elles ont accompli les formalités constitutionnelles nécessaires pour l'approbation de l'Accord dans leurs pays respectifs et ledit Accord est valide pendant 10 ans.

Au cas où l'une ou l'autre Partie contractante décide de mettre fin au présent Accord, elle doit notifier l'autre Partie contractante par écrit et par la voie diplomatique sa décision au moins douze (12) mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. Si non, le présent Accord est renouvelé pour une période indéfinie et, à ce stade, les Parties contractantes peuvent se notifier à tout moment par écrit et par la voie diplomatique leur décision d'y mettre fin. L'Accord est dénoncé douze (12) mois après la réception de la notification écrite.

En ce qui concerne les investissements réalisés avant la date de la dénonciation du présent Accord, les articles 1 à 11 restent en vigueur pendant une période de dix ans supplémentaires à partir de cette date.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à La Havane le 21 novembre 2000 en double exemplaire et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République du Paraguay :

**JUÁN ESTEBAN AGUIRRE MARTÍNEZ**  
Ministre des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement de la République de Cuba :

**MARTA LOMAS MORALES**  
Ministre des Investissements étrangers et de la coopération économique